

C.A. de Concepción

Concepción, jueves veinte de octubre de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparecieron los abogados Luis Alejandro Parra Muñoz y Nicolás Enrique Fuentes Tapia, ambos con domicilio en calle O'Higgins N°940, Oficina 311, Concepción, obrando en nombre y representación de **Héctor Hernán Yefe Painao**, Suboficial Mayor en retiro de Carabineros de Chile, con domicilio en Parcela N° 99, sector Pangué, comuna de Los Álamos, **e interponen acción de protección en contra de la Dirección General de Carabineros de Chile**, representada por su General Director Ricardo Alex Yáñez Reveco, y/o quien lo subrogue legalmente, con domicilio en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1196, Santiago, por el acto ilegal y arbitrario que señala a continuación y que vulnera lo preceptuado en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expresan que mediante la Resolución Exenta N° 405, de fecha 29 de abril de 2019, de la Prefectura Llanquihue, se concedió al recurrente su retiro absoluto de la institución y el bono de permanencia, resolución que en la letra d) de su parte “resolutiva” le otorga por única vez dicho “bono de permanencia” de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 20.801, consistente en tres meses de su última remuneración imponible, lo que permite establecer que no se consideró para el cómputo del referido beneficio el período en el cual cumplió con su servicio militar y que corresponde a 1 año y 5 meses, escenario que le permitía ser beneficiario de cinco sueldos de su última remuneración imponible por concepto del bono de permanencia y no tres como ocurrió, ello al sumar 32 años 10 meses y 5 días de servicios efectivos en la institución policial.

Añaden, que con fecha 5 de julio de 2022, su representado presentó reclamación ante la Prefectura de Llanquihue, por no estar de



acuerdo con lo resuelto respecto al monto del bono de permanencia que le fue otorgado al momento de su retiro voluntario, por considerar que no se ajustó a derecho, ya que no se tuvo en cuenta para el cómputo de éste el tiempo de afiliación correspondiente al período en el cual prestó su servicio militar y que le fue debidamente reconocido por la institución, solicitando en definitiva que se volviera a recalcular este beneficio y para ello se considerara el término en el cual cumplió como conscripto, recibiendo respuesta formal de dicha institución mediante el Oficio N° 2, de fecha 28 de julio 2022, suscrita por Prefecto de Llanquihue Coronel Fernando Fajardo Zamanillo, autoridad institucional que se negó a tal solicitud, cuyo fundamento principal fue que el tiempo de servicio militar no constituye un periodo trabajado. Que pese a la respuesta dada, dice que no se puede desconocer que ese período de tiempo sí se le reconoció como servicios efectivos en la institución y que le permitieron sumar tiempo en Carabineros de Chile y así hacerse acreedor de percibir beneficios tales como trienios y mayores sueldos, en efecto y según da cuenta la propia “hoja de vida” de su representado.

Sostienen, asimismo, que la Resolución Exenta Reservada de fecha 19 de noviembre de 2019, emitida por el Departamento de Pensiones de Carabineros, concede pensión de retiro e indemnización de desahucio a su mandante, en efecto, aseveran que en el rubro titulado “2) años de servicios computables”, de la referida resolución, se le reconoce expresamente 1 año y 5 meses de servicio militar, por lo que cuya suma de años de servicios computables, resulta un período total correspondiente a 32 años, 10 meses y 5 días. Que todos los actos administrativos y documentos anteriores dejan en evidencia que Carabineros de Chile, sí consideró como períodos de “servicios efectivos” en la institución policial el que correspondió al término en el cual el recurrente realizó su servicio militar.

Citan la normativa aplicable al caso de autos y detallan, en su concepto, en que consiste el principio de confianza legítima, normas y



principios que estiman fueron transgredidos por la recurrida y seguidamente piden que se acoja el recurso, acogerlo y, en definitiva, se declare que lo resuelto por Carabineros de Chile, mediante el Oficio N° 2, de 28 de julio de 2022, emitido por el Prefecto de la Prefectura Llanquihue, es arbitraria e ilegal, por cuanto afecta las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, en atención a que utiliza un criterio desigual, antojadizo e ilegal que priva a su representado de percibir por concepto de bono de permanencia, cinco sueldos de su última remuneración imponible, para cuyo cálculo no se le considera el período de conscripción militar que le fue reconocido previamente por la recurrida como servicios efectivos y que en el total de servicios computables suma un total de 32 años 10 meses y 5 días de servicios efectivos, traicionando así la confianza legítima del recurrente que nace en el año 1991. Que se ordene a la recurrida recalcular y se le compute el período de conscripción militar prestado y reconocido en Carabineros de Chile y se le pague a su representado los dos meses de sueldo de su última remuneración imponible que se le adeuda, por concepto del bono de permanencia establecido en el artículo 5° de la Ley 20.801 y así sumar los cinco sueldos que en derecho le corresponde impetrar, por último, solicitan que se ordene reestablecer el imperio del derecho adoptando toda otra medida que se estime pertinente conforme al mérito de autos; con costas.

Informó Juan Pablo Caneo Farías, General de Carabineros, Jefe de Zona, VIII zona de Carabineros Bío Bío, expresando, en primer lugar, que el recurso fue deducido en forma extemporánea, dado que la resolución objeto del recurso fue notificada al recurrente, con fecha 2 de mayo de 2019, quien firmó conforme y sin haber interpuesto en el tiempo inmediato algún recurso o formulado alguna alegación respecto al contenido de la misma. Que recién con fecha 5 de julio de 2022, el exfuncionario habría requerido el pago del bono de permanencia, presentando un requerimiento ante



el Mando de Repartición, presentación que fue respondida con fecha 28 de julio de 2022, siendo éste el documento el utilizado por el recurrente para computar el plazo para interponer el recurso de protección; que, en consecuencia, han transcurrido aproximadamente tres años desde que el afectado tomó conocimiento del supuesto acto arbitrario e ilegal reclamado, superándose con creces el plazo fatal de 30 días con que cuenta para la interposición del recurso.

En cuanto al fondo, cita la normativa aplicable en cuanto a los servicios efectivos y computables para el retiro y el bono de permanencia, para luego indicar que de los términos consignados en la Ley N° 20.801, se infiere que la voluntad del legislador, para efectos de impetrar el aludido bono de permanencia, está orientada, inexcusablemente, a incentivar la prolongación de la carrera profesional en Carabineros de Chile a través de los servicios “efectivamente” prestados en la institución, entendidos, en virtud de la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, como aquellos definidos en los incisos primeros de los artículos 61 de la Ley N°18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, y 83 del D.F.L. (ex-Interior) N° 2, del año 1968, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile. Que ello es corolario de la aplicación de las normas interpretativas contenidas en el Código Civil, particularmente, en lo que refiere a lo consagrado en el artículo 22 de ese texto legal, cuyos términos reconocen que el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya, entre todas ellas, la debida correspondencia y armonía, puesto que al contener las referidas normas la expresión *“en ejercicio activo de sus respectivos empleos”*, su tenor literal exige la concreción de servicios materialmente prestados y ejecutados en instituciones ligadas a la Defensa Nacional o a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, lo cual no es posible desatender. En ese sentido, afirma que en la especie no corresponde considerar, como servicio efectivo, para el otorgamiento del bono de permanencia, el período en el cual el



recurrente prestó servicio militar, puesto que corresponde a un tiempo computable para el retiro, cuya naturaleza es una ficción legal. Por consiguiente, infiere que la decisión en orden a no pagarle el bono de permanencia al recurrente, equivalente a cinco meses de su última remuneración imponible, regulado en el artículo 5° de la Ley N° 20.801, se ajustó a derecho.

En cuanto a la supuesta errónea interpretación que habría realizado la Prefectura de Carabineros Llanquihue N° 25, respecto de la normativa aplicable a la materia objeto de examen, dice que los pronunciamientos emitidos por la Contraloría General de la República dicen relación con informes consistentes en una opinión jurídica, cuya estricta finalidad es interpretar un precepto legal o reglamentario, fijando su respectivo sentido y alcance. De esa manera, corresponde a la referida entidad contralora, de acuerdo al Capítulo X de la Carta Fundamental y, en general, conforme al ordenamiento jurídico nacional, su emisión con fuerza obligatoria, asentándose en la jurisprudencia administrativa que debe ser observada por los órganos sometidos a su fiscalización (aplica dictamen N° 64.951, del año 2014). Bajo ese contexto, hace presente que los dictámenes N°14.292, del año 2007 y 18.219, del año 2016, han establecido el carácter constitucional e imperativo de la interpretación jurídica que efectúa el organismo contralor, de manera que sus decisiones se circunscriben a ejercer las prerrogativas que le han sido premunidas, sin que lo anterior importe la arrogación de facultades de orden jurisdiccional. De este modo, afirma que corresponde a Carabineros de Chile, la observancia de aquellas directrices impartidas por el ente fiscalizador, teniendo en cuenta que el desconocimiento de las mismas, por un Jefe de Servicio que resuelva en contra de aquellas, supone la responsabilidad de ese funcionario, sea por vía administrativa, civil o penal, según corresponda. En consecuencia, los dictámenes emitidos, sobre la materia, resultan obligatorios para los órganos y funcionarios sometidos a su control, debiendo ser especialmente observados por los abogados,



fiscales o asesores jurídicos de las distintas oficinas de la Administración Pública.

Precisa que, respecto de los trienios, conforme a lo dispuesto en el artículo 46, letra a), inciso segundo, del D.F.L. (ex-Interior) N° 2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, para gozar de ese beneficio sólo son computables los tiempos establecidos en el artículo 45 y los abonos a que se refiere el artículo 87, encontrándose mencionados en forma expresa en la primera norma, específicamente en las letras a) y b), los tiempos que se le reconocieron para percibir el primer trienio. Por otra parte, dice que el artículo 43, letra i), inciso segundo, del aludido Estatuto, señala que los servicios prestados en las Instituciones Armadas y la totalidad del tiempo servido como conscripto en el Ejército, en la Armada o en la Fuerza Aérea y como aprendiz en las Fuerzas Armadas, son computables para efectos de completar los dos años de servicios que se exige al Personal de Nombramiento Institucional de Orden y Seguridad del grado de Carabinero que ha aprobado el curso de formación, de acuerdo con la reglamentación respectiva, para tener derecho a percibir la renta asignada al grado superior. Que ello demuestra que esos períodos no se les estiman como *“servicios efectivos”*, sino que, como servicios computables para efectos de esos beneficios en particular, conforme a la normativa aplicable a aquellos. En consecuencia, asevera que el cómputo respondió a hipótesis diversas a la del bono de permanencia.

Considera que es posible colegir que la decisión institucional cuestionada, se ejecutó con estricta sujeción de lo dispuesto en la normativa aplicable, no advirtiéndose ilegalidad ni arbitrariedad alguna en lo manifestado por Carabineros ni vulneración alguna a los derechos esgrimidos por el recurrente.

Pide el rechazo del recurso, con costas, en atención a que, en los hechos descritos, Carabineros de Chile no ha vulnerado derecho alguno, actuando conforme al ordenamiento jurídico.

Se trajeron los autos en relación.



CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA EXTEMPORANEIDAD:

PRIMERO: Que la alegación de extemporaneidad más arriba reseñada, habrá de ser desde luego desestimada, y sin mayores dilaciones, ya que en autos aparece que el conocimiento del acto reclamado, lo tuvo el reclamante al ser notificado de la respuesta dada por el Prefecto de Carabineros de Llanquihue, con data 1 de agosto pasado, lo que importa que a la fecha de interposición del recurso no había transcurrido el término de caducidad regulado en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia.

Es cierto que, en forma previa, en abril de 1019 se dictó la Resolución Exenta N° 405, mediante la cual se concedió el retiro al actor y se fijó en tres meses el bono de permanencia, empero también lo es que, con posterioridad, y haciendo uso de sus derechos, el recurrente reclamó en sede administrativa de esto último, y fue con ocasión del Oficio N° 2, de 28 de julio pasado, suscrito por el Prefecto mencionado, donde se le dieron a conocer con precisión las razones por las cuales se denegaba la reclamación formulada el día 5 de ese mismo de julio, siendo del caso destacar que aquí sólo se le hicieron presente las motivaciones normativas de fondo que, a juicio de dicha autoridad, hacían improcedente tal solicitud, y nada se le dijo acerca de alguna extemporaneidad de ese reclamo administrativo

Este particular escenario fáctico, entonces, conduce lógicamente a estimar que la pretendida extemporaneidad no es tal, debiendo tenerse en cuenta aquí, además, que cualquier respuesta jurisdiccional de término de carácter formal, que no implique entrar a dilucidar en su mérito la acción conservativa de que se trata, debe ser razonablemente entendida en términos excepcionales y restringidos, en la medida que ello no importa, como es lógico, el otorgamiento de una tutela jurisdiccional efectiva.

EN CUANTO AL FONDO:



SEGUNDO: Que, ahora bien, en lo tocante a la reclamación del “bono de permanencia” y específicamente acerca del error en cuanto al cálculo de su monto que se acusa en el recurso –y ello conforme a lo resumido en la sección expositiva de este fallo-, cabe señalar que los litigantes discrepan en cuanto a la forma en que debe calcularse, porque según el actor debe incluirse aquí su período de conscripción militar y, en cambio, ello resulta ser improcedente para la recurrida.

En consecuencia, lo primero que cabe acotar es el tratamiento normativo que existe respecto de la materia en discusión.

TERCERO: Que, primeramente, el artículo 5° de la Ley N° 20.801, dispone lo siguiente:

“Establécese un bono de permanencia para los Oficiales de Fila de Nombramiento Supremo y para el personal de Fila de Nombramiento Institucional que, habiendo cumplido 20 años de servicios efectivos y con derecho a pensión de retiro, opte por continuar su carrera, a lo menos hasta cumplir los años efectivos indicados en los incisos que siguen.

Este bono lo pagará Carabineros de Chile al momento que el funcionario beneficiado perciba la primera pensión de retiro y consistirá en un número de meses de su remuneración imponible, con un tope de cinco meses, conforme a la regla siguiente:

-Retiro con 29 años efectivos: 2 meses.

-Retiro con 30 años efectivos: 3 meses.

-Retiro con 31 años efectivos o más: 5 meses.

El presente bono no se considerará remuneración para ningún efecto legal y, consecuentemente, no estará afecto a tributación ni a descuentos de seguridad social o de otra naturaleza.

El beneficio a que se refiere este artículo no se otorgará al personal de instituciones distintas de Carabineros de Chile, aun cuando le sea aplicable, directa o indirectamente, la legislación relativa a Carabineros de Chile.



Este bono es incompatible con aquellos previstos en los artículos 5° y 6° transitorios de la ley N°19.941 y 2° y 3° transitorios de la ley N°20.104.

Con todo, a contar de la fecha de publicación de la presente ley, los bonos señalados en el inciso anterior se pagarán con la percepción de la primera pensión de retiro.”.

CUARTO: Que, por su parte, el artículo 61 de la Ley 18.961 –Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile– prescribe que:

“Son servicios efectivos en Carabineros los prestados por el personal en cualquiera de las Instituciones de la Defensa Nacional o de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el ejercicio activo de sus respectivos empleos, afectos a la Dirección de Previsión de Carabineros o Caja de Previsión de la Defensa Nacional o en las comisiones que el Presidente de la República le confíe, aunque sean ajenas a las funciones de dichos empleos.

Asimismo, serán servicios efectivos todo el tiempo de permanencia como Aspirante a Oficial en la Escuela de Carabineros y como Carabinero Alumno en los planteles de formación institucional; el primer año de estudio en las Escuelas Institucionales de las Fuerzas Armadas, aprobado con Valer Militar, respecto de quienes ingresen a dichas escuelas sin haber hecho el Servicio Militar; los dos últimos años de estudio en la Escuela Militar, Naval, de Aviación, de Servicio Femenino Militar, de la Policía de Investigaciones, de las Escuelas de Ingenieros de la Armada y Pilotines, Escuela de Suboficiales, de Armas en el Ejército, la Escuela de Grumetes, la Escuela de Artesanos y otras en que funcionen cursos de grumetes de la Armada y la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea, o el tiempo efectivo que durante ese lapso el alumno permanezca o haya permanecido en el respectivo establecimiento, y el tiempo servido como conscripto y aprendiz de las Fuerzas Armadas, siempre que dichos períodos hayan sido cotizados en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional o Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, según corresponda.



El tiempo computable en las calidades mencionadas en el inciso anterior no podrá exceder, en ningún caso, de tres años en total.”.

A su turno, el artículo 62 de este mismo texto legal, dispone:

“Serán computables para el retiro los servicios prestados en las Instituciones afectas al régimen de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.

Serán, asimismo, computables los servicios válidamente prestados en cualquier organismo de la Administración del Estado, siempre que no sean paralelos y no se hayan considerado para otra jubilación o retiro.

Se computarán igualmente para el retiro los años de abonos otorgados al personal por accidentes sufridos en actos del servicio.

También se computará el tiempo reconocido en conformidad a la ley N°10.986, sobre continuidad de la previsión y el declarado compatible para el retiro o jubilación para todos los efectos legales por cualquier ley de carácter general o particular.

Se considerarán servicios computables los dos últimos años o cuatro últimos semestres de estudios profesionales de los Oficiales de Justicia, Sanidad, Sanidad Dental, Veterinaria, Servicio Religioso, de los Escalafones de Carabineros. Las imposiciones correspondientes serán de cargo de los interesados y se calcularán sobre el sueldo base del grado 14 de la escala de sueldos de Carabineros.

Los servicios a que se refiere este artículo no se computarán para completar los veinte años de servicios efectivos requeridos para impetrar pensión de retiro.”.

QUINTO: Que, como puede observarse, el legislador ha previsto con claridad que los servicios efectivos en Carabineros incluyen aquellos prestados por el personal en cualquiera de las Instituciones de la Defensa Nacional o de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el ejercicio activo de sus respectivos empleos, afectos a la Dirección de Previsión de Carabineros o Caja de Previsión de la Defensa Nacional o en las comisiones que el Presidente de la República le confíe, y de ello



deviene, entonces, que el tiempo de conscripción en el servicio militar constituye un servicio efectivo en Carabineros.

Por lo demás, el inciso segundo del artículo 61 de la referida Ley N°18.961, contempla expresamente dentro de este rubro al “...*tiempo servido como conscripto y aprendiz de las Fuerzas Armadas, siempre que dichos períodos hayan sido cotizados en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional o Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, según corresponda.*”.

SEXTO: Que, consecuentemente, es la Ley Orgánica de Carabineros la que ha definido qué es lo que ha de entenderse por años de servicios efectivos en la institución, incluyendo el tiempo de conscripción del Servicio Militar. En consecuencia, cuando el artículo 5 de la citada Ley N° 20.801, se refiere al otorgamiento de un bono de permanencia para quienes habiendo cumplido 20 años de servicios efectivos y con derecho a pensión de retiro opten por continuar su carrera, no puede sino comprenderse que son aquellos referidos en los artículos 61 y 62 antes expuestos; siendo innecesario que la disposición legal en examen lo hubiera establecido en forma expresa, puesto que la propia ley orgánica mencionada los define.

SÉPTIMO: Que si bien no existe discusión acerca de la fuerza obligatoria de los dictámenes de la Contraloría General de la República para los organismos de la Administración del Estado afectos a su control, no debe olvidarse que corresponde a los tribunales -en su labor de otorgamiento de la tutela judicial efectiva que se les impetrevisar la legalidad de tales pronunciamientos, máxime que en autos y atendido el reclamo que hace el recurrente de infringirse con ello el texto expreso de los artículos 61 y 62 de la Ley N° 18.961, denuncia a su respecto la vulneración de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República y que esta Corte está en obligación de amparar mediante la acción conservativa de que aquí se trata.



OCTAVO: Que, de esta manera, el obrar de la recurrida –aun cuando se funda en la jurisprudencia del ente contralor– constituye un acto ilegal y arbitrario, desde que se aparta del correcto sentido y alcance de las normas precedentemente transcritas, excluyendo del cálculo del bono de permanencia el tiempo en el cual el recurrente realizó el servicio militar.

Así, por lo demás, se ha resuelto reiteradamente, pudiendo citarse, entre otras, los siguientes fallos: Sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua de 23 de abril de 2021, rol 2604-2021, confirmada por la Excma. Corte Suprema con fecha 1 de junio de 2021, en rol 34.754-2021; y sentencias de esta Corte de Apelaciones de 20 de septiembre de 2021, en Rol 8705-2021; de 22 de septiembre de 2021, en Rol 9120-2021; de 15 de noviembre de 2021, en rol 11.375-2021, confirmada por SCS de 10 de diciembre de ese año, en rol 91.880-21; de 7 de abril del presente año, en rol 4010-2022, confirmada también por SCS de 3 de mayo pasado, dictada en rol 11.818-2022, y de 21 de septiembre de este año, pronunciada en rol 61.525-2022.-

NOVENO: Que, además, ha de considerarse que el funcionario de Carabineros evalúa su permanencia en la institución de la forma como lo pretendía incentivar la Ley 20.801, a través de los términos literales en que se establece el bono señalado en su artículo 5º, teniendo como referente aquellas pensiones de retiro que consideraban para el cálculo de servicios efectivos los de conscripción militar. Es en ese momento, al cumplir 31 años de servicio, cuando el funcionario considera la opción de retiro para gozar del monto más alto del bono de permanencia que señala ley.

Dicha decisión obedece, por cierto, al principio de confianza legítima en la actuación de la Administración Pública, conceptualizada como “una garantía en el ámbito público, consistente en la defensa de los derechos del ciudadano frente al Estado y en la adecuada retribución a sus esperanzas en la actuación acertada de éste”



(Bermúdez Soto, Jorge, “El principio de confianza legítima en la actuación de la Administración como límite a la potestad invalidatoria”, en Revista de Derecho U. Austral, vol. 18, N°2 (2005), pp. 83 y ss.).

Entonces, al haber incluido la ley el tiempo servido en conscripción militar, nació para el recurrente la confianza legítima de incorporarlo dentro de su periodo de servicio efectivo y, así, decidir el retiro una vez completado el tiempo respectivo, no pudiendo ser afectado por una interpretación administrativa que se aparta del claro tenor de las normas transcritas y que genera una desigualdad que el derecho no puede amparar.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, resulta efectivo que en la especie nos hallamos de frente a una actuación ilegal imputable al órgano recurrido, y de paso arbitrario, la que ha vulnerado las garantías de igualdad ante la ley, contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al calcular el bono de permanencia del actor en términos distintos a todos aquellos funcionarios de Carabineros que se han pensionado bajo la correcta interpretación de las normas de la Ley N° 20.801, y, también, la protegida en el literal 24 del mismo artículo, cuando se le priva a aquél de una parte del bono de permanencia a que tiene derecho.

La protección impetrada, consiguientemente, habrá de ser otorgada del modo que se pasará a decir.

Por esas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I.- Que se desestima la alegación de extemporaneidad del recurso formulada por la recurrida, y

II.- Que **SE ACOGE** el singularizado recurso de protección deducido en estos autos en favor de **Héctor Hernán Yefe Painao**, en cuanto se ordena que la Dirección General de Carabineros



procederá a recalcular el “bono de permanencia” del recurrente, contemplado en el artículo 5° de la Ley N° 20.801, debiendo considerar al efecto el período de conscripción militar prestado por éste y pagarle, en consecuencia, el correspondiente saldo insoluto.

Dicha Dirección informará circunstanciadamente a esta Corte acerca del cumplimiento de lo ordenado, dentro del plazo de veinte días hábiles de ejecutoriada que sea la presente sentencia. Oficiese en su oportunidad.

No se condena en costas a la recurrida, por estimarse que tuvo motivos plausibles para oponerse al acogimiento del recurso de autos.

Cumplase, oportunamente, con lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese oportunamente.

Redacción del ministro titular César Gerardo Panés Ramírez.

Rol N° 66.090-2022 – Protección.-



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción integrada por los Ministros (as) Cesar Gerardo Panes R., Mauricio Danilo Silva P. y Fiscal Judicial Maria Francisca Duran V. Concepcion, veinte de octubre de dos mil veintidós.

En Concepcion, a veinte de octubre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

